

IVÁN CEPEDA EN PASTO

Unen fuerzas en Nariño para ganar en primera vuelta

Diversos sectores sociales, políticos y culturales del departamento, firmaron un MANIFIESTO denominado ALIANZA POR LA VIDA: NARIÑO CORAZÓN DEL CAMBIO; y recibirán a Cepeda con multitudinaria concentración en la plaza de Nariño

Organizaciones sociales y fuerzas políticas del departamento sellaron un acuerdo de unidad para respaldar la propuesta de Iván Cepeda y Aída Quilcué, priorizando la ejecución de obras viales estratégicas y la defensa de los derechos humanos.

En un encuentro que congregó a los voceros del Pacto Histórico con delegados de sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas, con políticos reconocidos como Parmenio Cuellar, Pedro Vicente Obando, Esperanza Rojas y Guillermo García, se formalizó el lunes en Pasto la Alianza por la Vida: Nariño Corazón del Cambio. En el evento se firmó un manifiesto que busca articular las demandas históricas de la región con el debate político nacional, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

Pag. 2-3



Multitudinaria manifestación de respaldo a Iván Cepeda en Pasto

El actual senador del Pacto Histórico se consolida como el principal aspirante a la Presidencia, impulsado por una base electoral sólida, un discurso de concertación, una personalidad seria y un compromiso de siempre con la sociedad colombiana.

Los procesos de paz y los ruidos de guerra

Más allá de la discusión jurídica, el jefe negociador enfatizó que la realidad en territorios como el Pacífico nariñense y Putumayo no puede reducirse a un asunto

policial. Novoa señaló que el dominio que ejercen estos grupos armados es consecuencia de una ausencia histórica del Estado.

Pag. 16

Regional Nariño una economía desconectada



Al aislamiento físico se suma el conflicto comercial con Ecuador, que revela una profunda ceguera de política pública.

Pag. 11

Gobernador de Nariño es víctima de un señalamiento inaceptable

Luis Alfonso Escobar denuncia a Álvaro Uribe ante la justicia por señalamientos en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Pag. 8

Abelardo de la Espriella y la agresividad de la derecha



El reconocido abogado penalista consolida un segundo lugar bajo un discurso de autoridad, reducción del Estado y una estética de éxito personal.

Campañas

El ascenso de Paloma Valencia está llegando a su techo?



Unen fuerzas en Nariño para ganar en primera vuelta

La iniciativa se presenta como una convergencia de voluntades que trasciende las militancias partidistas tradicionales para enfocarse en cinco ejes programáticos: equidad social, lucha contra la corrupción, justicia ambiental, paz territorial y un diálogo nacional incluyente. Según los voceros del Pacto, el propósito es garantizar que las necesidades de la zona sur del país sean el centro de la agenda pública del próximo Gobierno.

Prioridades para el desarrollo regional

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue el compromiso de los firmantes para actuar como veedores ciudadanos sobre la inversión de 12.2 billones de pesos contemplada en el Pacto Territorial por la Paz de Nariño. La Alianza enfatizó que el progreso del departamento depende de la culminación real de infraestructuras críticas que llevan décadas en espera.

Entre las obras señaladas como urgentes se encuentran la doble calzada Pasto-Popayán, la vía San Francisco-Mocoa y los tramos viales que conectan a la capital nariñense con Ipiales y el corregimiento de Catambuco. “La conectividad y el desarrollo agroindustrial son el único camino para que nuestras comunidades superen el rezago”, señala el documento.

Un enfoque de paz y democracia

El manifiesto también hace un llamado a la protección de la vida en los territorios afectados por el conflicto. Los sectores sociales insistieron en que la paz debe traducirse en garantías de derechos humanos y no solo en acuerdos de papel. Asimismo, reivindicaron el papel de la juventud y la base popular como motores de la democracia, instando a la ciudadanía a participar activamente mediante la vigilancia del proceso electoral.

Respecto a la actual contienda política, se ratificó el apoyo a la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué, argumentando que su propuesta representa la continuidad de las transformaciones sociales iniciadas en el actual periodo presidencial. El acto concluyó con el establecimiento de una mesa de trabajo para definir acciones conjuntas que promuevan la participación ciudadana en las urnas durante las próximas semanas.

Cepeda lidera intención de voto

El actual senador del Pacto Histórico se consolida como el principal aspirante a la Presidencia, impulsado por una base electoral sólida y un discurso de concertación.



La figura de Iván Cepeda Castro ha pasado de ser la de un legislador de perfil reflexivo a convertirse en el eje central de la contienda electoral. Con una intención de voto que ronda el 40%, el candidato del Pacto Histórico ha logrado romper los pronósticos iniciales que le asignaban un techo electoral limitado. Su ascenso plantea un escenario de continuidad para el proyecto político actual, aunque con un estilo de liderazgo más técnico y menos dado a la confrontación mediática que el del actual mandatario.

La trayectoria de Cepeda está profundamente ligada a la historia del conflicto colombiano. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1994, el hoy candidato ha hecho de la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una salida negociada a la violencia su bandera principal. Esta historia personal, que comparte rasgos trágicos con otros actores de la política nacional, ha moldeado un carácter sobrio y controlado, incluso en los momentos de mayor tensión política o personal.

En el ámbito legislativo, Cepeda se destacó por su capacidad para entablar diálogos con diversos sectores, una cualidad que ahora intenta proyectar a nivel nacional bajo la premisa de un “Gran Acuerdo Nacional”. Esta propuesta busca sentar a las fuerzas políticas y sociales en una mesa de negociación para definir políticas públicas de largo plazo. No obstante, sectores críticos señalan que la iniciativa aún carece

de detalles concretos y que podría ser una estrategia para evitar posturas definitivas sobre temas sensibles, como la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

El panorama que enfrentará el próximo jefe de Estado es complejo. Los indicadores económicos sugieren desafíos significativos en materia fiscal, energética y de seguridad. Aunque la actual administración ha implementado medidas de impacto social que han beneficiado a sectores vulnerables —como el aumento del salario mínimo y programas de subsidios directos—, el próximo gobierno deberá gestionar una deuda pública considerable y la necesidad de reactivar sectores como la infraestructura y la vivienda.

En materia de orden público, la política de “Paz Total”, de la cual Cepeda ha sido uno de los principales arquitectos, es objeto de un intenso escrutinio. Los datos indican un crecimiento en el control territorial de grupos armados ilegales en diversas regiones, lo que genera dudas sobre la efectividad de los ceses al fuego actuales. El candidato sostiene que el proceso requiere ajustes, y defiende la necesidad de persistir en el diálogo para reducir el impacto de la guerra en las comunidades rurales.

Los opositores han intentado vincularlo con antiguas estructuras insurgentes. Ante esto, Cepeda ha invocado su derecho a la presunción de inocencia y ha calificado estos señalamientos como intentos de estigmatización que ponen en riesgo su integridad, recordando que sus contactos con grupos armados han ocurrido siempre bajo marcos legales de mediación de paz.

Aunque Cepeda encabeza la primera vuelta, las encuestas sugieren que figuras de la oposición podrían aglutinar el voto de los sectores que rechazan la continuidad del Pacto Histórico. La capacidad del senador para convencer a los votantes de centro y demostrar que cuenta con un plan de gobierno ejecutable y fiscalmente responsable será determinante para definir si el país opta por profundizar el actual modelo o por un cambio de rumbo en la conducción del Estado.

El candidato del Pacto Histórico propone una “revolución ética” para transformar las instituciones

Iván Cepeda aseguró que el núcleo de su propuesta política es la superación del modelo de gobernanza liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Para el candidato, las figuras de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, sus contendores en la carrera electoral, representan una visión de país basada en la polarización que su proyecto busca transformar a través de un cambio social profundo.

En el desarrollo de su agenda programática, Cepeda ha planteado la necesidad de una “revolución ética”. Según el candidato, la corrupción en el país ha trascendido el plano de los delitos individuales para consolidarse como un sistema que permea las estructuras del Estado. Sostiene que su prioridad será dismantelar estos mecanismos de cogobierno ilegal para recuperar la legitimidad de las instituciones y atender las necesidades básicas de la población.

Reconoce los avances del gobierno actual, y mantiene una postura crítica frente a temas que considera pendientes.

En materia de derechos humanos y orden público, el candidato abordó la complejidad de

la jefatura de Estado frente al uso de la fuerza. Si bien reiteró su rechazo a prácticas como los bombardeos y el uso de glifosato, admitió que la responsabilidad institucional plantea retos éticos significativos. Sobre la resolución del conflicto armado, se mostró partidario de retomar diálogos con el ELN bajo condiciones claras y propuso un “Acuerdo Nacional” para impulsar reformas, dejando la posibilidad de una Asamblea Constituyente como una opción supeditada al consenso y no como una imposición.

Finalmente, en el ámbito internacional, Cepeda aboga por una relación de cooperación con Estados Unidos basada en el respeto mutuo a la soberanía, rechazando cualquier intento de injerencia externa en el proceso electoral colombiano. Sobre la situación en Venezuela, el aspirante defendió una política de equilibrio que combine la vigilancia

de los derechos humanos con el respeto a la autonomía del país vecino, con el fin de facilitar salidas democráticas y mantener canales diplomáticos estables.



El papel de la Corporación para la Comunicación (CCOMUNICA) en Nariño

Se ha reducido, con peligrosa ligereza, una de las facultades más humanas a una simple herramienta de mercadotecnia o a un accesorio secundario de las organizaciones y entidades. Sin embargo, es imperativo entender que la comunicación no es el envoltorio del progreso; es, en rigor, su columna vertebral y el hilo invisible que teje la posibilidad de un futuro común.

Hoy, la supervivencia organizacional no depende de quién grita más fuerte, sino de quién logra generar confianza. Aquí es donde el comunicador moderno trasciende su rol tradicional para convertirse en un estratega de la percepción y el sentido. Ya no basta con dominar la técnica de la postproducción o la gestión de redes sociales; el verdadero reto es dotar de alma y dirección estratégica a los mensajes para que estos resuenen en la identidad del receptor.

El espacio más crítico para esta disciplina no está en los anaqueles de consumo, sino en el terreno del desarrollo humano. La participación social es la cuestión decisiva de nuestra era.

La historia del progreso está plagada de infraestructuras fallidas y proyectos abandonados porque se consideró a la población como un objeto pasivo de políticas públicas, y no como el sujeto protagonista de su propia transformación. Sin comunicación, la participación es un simulacro.

La tecnología ha cumplido su parte, ha democratizado la voz. Desde la radio comunitaria en zonas rurales hasta la sofisticación satelital, las herramientas están al alcance de la mano. Sin embargo, la brecha actual no es tecnológica, sino de propósito. El desafío para los sectores públicos y privados es comunicar con una profunda sensibilidad social.

Debemos dejar de ver la comunicación como un gasto de propaganda o un motor de lucro para asumirla como la fuerza motriz que permite a la humanidad diseñar su propio rumbo. Si el progreso es el tejido de nuestras aspiraciones, la comunicación es el hilo con el que se elabora la trama.

CCOMUNICA es una corporación que trabaja en Nariño para hacer de la comunicación un ejercicio permanente de encuentro con la realidad y contribuir a transformarla en bien común.

NARIÑO HOY

El otro medio

20 de mayo de 2026 Edición N. 1

PUBLICACIONES CCOMUNICA
Carrera 20A # 17-59 piso 2 Pasto
En Internet: www.nariño hoy.com

Dirección

María Fernanda Maya

Edición

Lorena Estupiñan

Administración

Yohana Ricaurte

Reportería

Nicol Santacruz

Victoria Urbano

Digital

Samir Acosta

CONTÁCTENOS

Celular: 3106469136

WhatsApp: 3106469136

Facebook: Nariño Hoy

X: @HoyNarino

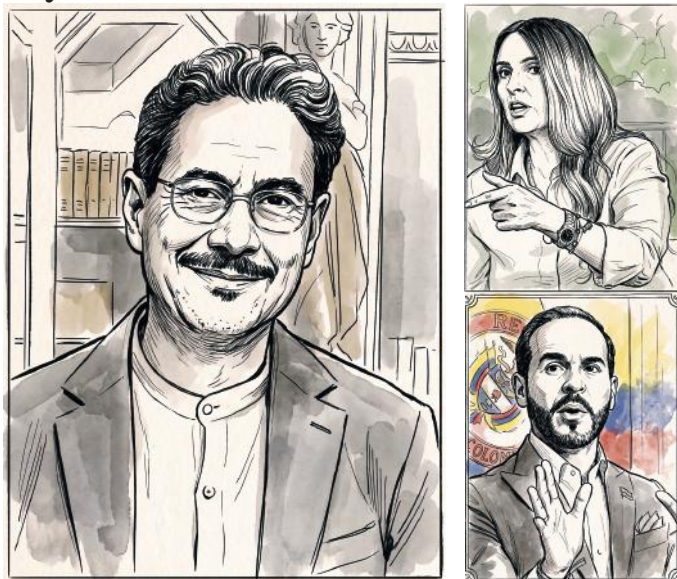
Instagram: @narino hoyoficial

TikTok: @narino hoyoficial

web: www.nariño hoy.com

IMAGEN HOY

Hay dos caminos



El PETRISMO o el URIBISMO

FRASE HOY

“

Alguien luchó por tu derecho al voto.
Úsalo.

Susan B. Anthony

Activista por los derechos de las mujeres durante el movimiento de las sufragistas a principios del siglo XX.

RHumores

El nuevo trabajo de los contratistas de la Gobernación

A los abnegados muchachos y muchachas de la nómina paralela les ha brotado una tarea extra, andar en cuanta reunión, foro, tertulia o esquina se vaya a hablar del bendito oro del Gobernador.

Dicen las malas lenguas que ya no sueñan con las planillas del SECOP, sino con castillos de oro y duendecillos que custodian el tesoro departamental. Todo esto, por supuesto, mientras esperan pacientemente a que les paguen a tiempo sus mesas... así sea en devaluados y terrenales pesos, y no en lingotes.

Es conmovedor verlos llenar los recintos, aplaudir con el entusiasmo de quien ve la luz al final del túnel (o al final del socavón). Su capacidad de resistencia es admirable, aguantan discursos, no de los asesores de sus jefes, y pasan horas con una sonrisa que merece al menos un bono navideño.

La gran prueba de fuego será la próxima Audiencia Pública. Por favor, dejen libre una que otra silla para ver si cabe algún paisano de a pie, de esos ciudadanos que no cobran del presupuesto y que están sinceramente interesados en entender de qué se trata el negocio que nos sacará de pobres... al menos a un selecto porcentaje de los altos funcionarios.



Cuando los votos se multiplican y los gobernadores se quedan con los crespos hechos



Oscar Benavides, elegido Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras

Que alguien le pase un té de manzanilla a más de un barón electoral de la región, porque lo que pasó en las elecciones de Congreso no lo predecía ni la inteligencia artificial más optimista.

Ganar una curul de las comunidades afro en la Cámara de Representantes era un ejercicio de juntar unos 30.000 o 40.000 voticos. Pero llegó Oscar Benavides y procedió a clavar la medio bobadita de 150.000 votos. Un caudal electoral que dejó a más de un político tradicional buscando el flotador.

Recordemos que el gobernador Escobar tenía la finísima y muy humilde pretensión de armar su propio partido político si su ungido, el buen Benildo, salía victorioso... pero el que terminó haciendo realidad el sueño del partido propio fue Benavides, quien ahora se corona como el líder nacional del Movimiento Libres.

Felicitaciones al abogado Benavides por el récord Guinness criollo. Ahora, a camellar, que 150.000 almas están esperando que esa marea de votos no se disuelva en el agua de borrajas del Capitolio Nacional.

Entre aranceles, chismes de frontera y apuestas de honor

El RHumor nos lleva a la frontera con Ecuador, un lugar famoso por el cuy, el comercio y, ahora, por ser el epicentro del espionaje digno de James Bond (pero en versión criolla).

La chispa que encendió el chisme

Todo comenzó cuando la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco, soltó una de esas frases que son música para los oídos de los amantes del drama. Dijo en Ipiales, con una sutileza digna de un elefante en una cristalería, que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, subió los aranceles "coincidentalmente después de reunirse con Álvaro Uribe".

Traducción al cristiano: "No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el culpable de que sus zapatos importados estén más caros es el del sombrero vueltiao".

Al presidente Gustavo Petro, que le encanta X, le faltó tiempo para vincular al jefe del Centro Democrático con estas supuestas gestiones antipatrióticas.

Pero el "Gran Colombiano" lanzó una contrapropuesta que dejó a los corredores de apuestas frotándose las manos, un jurado internacional.

Y la apuesta no es cualquier pendejada de "el que pierda paga los cafés". No señor. Uribe propuso que el que mienta, renuncie a su cargo o a sus actividades políticas. Es el equivalente político de apostar el carro, la casa y el perro en una partida de dominó.

Como en Colombia nos encanta dejar las cosas a medias, el intercambio de acusaciones quedó en el limbo, flotando en el espeso aire de la especulación.



La embajadora Toña Velasco

El oro mixto

En la Gobernación están debatiendo la economía departamental en kilates. Desde que Luis Alfonso Escobar se posesionó, Nariño dejó de ser la tierra del galeras y el cuy, para convertirse en la mismísima secuela de Indiana Jones y el reino de las finanzas místicas. Nuestro gobernador no descansa en su romántica búsqueda de El Dorado... y al parecer, sus diputados tampoco van a volver a dormir.

Porque citar a la Asamblea un lunes festivo por la noche no es tener compromiso institucional; eso es tener un “desparche” enorme o una urgencia por ver quién se queda con el raspado de la olla de oro. Imagínense a los honorables diputados, con la cobija a medio quitar, interrumpiendo el festivo para ir a alucinar con lingotes virtuales y proyecciones macroeconómicas.

En este melodrama de la minería y las regalías, el guión está clarísimo. En la oposición habla hasta Berner, sospechan de todo, calculan cuánto pesa cada pepita y, por supuesto, advierten que el oro se puede convertir en carbón si no se vigila. Los de gobierno callan, uno no sabe si es que están meditando profundamente en el beneficio social o si simplemente están mudos de la emoción imaginando la nueva “Empresa Industrial y Comercial del Estado” que organizará Escobar.

Qué bonito que piensen en grande, de verdad. Pero entre tanta fiebre del oro y tanto trasnocho festivo, lo único que le sirve a la gente de Nariño es que las cosas se hagan bien, transparentes y sin afanes.

¡Salud por los alquimistas de la política regional!



Luis Alfonso Escobar, el gobernador

Los caídos del tarjetón (y la fe en la tricolor)



Fajardo, Claudia y Roy

A solo días de que el país se juegue el destino en las urnas este 31 de mayo, las encuestas y el ambiente de la calle han dejado algo claro, en la política colombiana el deporte nacional no es el fútbol, sino el canibalismo electoral.

La gran sorpresa de esta temporada no es quién va ganando, sino la velocidad con la que se desinflaron los que se sentían en el balcón presidencial. Sergio Fajardo y Claudia López terminaron devorados por una “desaparecida” de las encuestas que nadie vio venir en los retrovisores, demostrando que en el centro político el verdadero fuerte es la capacidad de evaporarse sin dejar rastro.

Por los lados del camaleonismo profesional, el panorama es desgarrador. Roy Barreras, que durante meses ensayó su mejor cara de “sucesor natural” y parecía el ungido perfecto, terminó la carrera más solo que un lunes por la mañana; sin nadie quiera acompañarlo. Y ojo con Paloma Valencia, que entre tanta alianza y tanto ruido de la derecha, camina por la cuerda floja con el riesgo de quedarse sin el pan y sin el nido.

Toda nuestra reserva de fe, sudor y rezos marianos están puestos en lo único verdaderamente sagrado que nos queda este año, que no vaya a perder tan rápido la Selección en el Mundial. Si nos van a romper el corazón, que sea por un fuera de lugar y no por un decreto de la Registraduría.

¡Que Dios nos agarre confesados y con el televisor encendido!

La Casa Blanca con mente presidencial en cortocircuito

La Casa Blanca insiste en que el mandatario goza de lucidez y que sus exámenes médicos son tan “perfectos” que uno no sabe si está leyendo el reporte de un presidente o las especificaciones de fábrica de un androide de última generación.

Sin embargo, la calle dice otra cosa. Seis de cada diez estadounidenses opinan que el comportamiento de Trump se vuelve... más “errático” con los años.

El veredicto de los expertos (sin anestesia)

John Gartner (Psicólogo de Johns Hopkins): Si comparas los discursos de Trump de los años 80 con los de ahora, el deterioro de su articulación verbal es más que notable. Antes hilaba frases y ahora parece que juega al Scrabble lanzando las letras al aire a ver dónde caen.

Frank George (Neurocientífico): Lanza la hipótesis de una demencia frontotemporal. Traducido al cristiano: la zona del cerebro encargada de la toma de decisiones racionales y el control de impulsos podría estar de vacaciones permanentes.

Que el tipo que tiene el maletín con los códigos nucleares sufra de “falta de control de impulsos” no es, sin duda, una excelente noticia.



Donald Trump, el poder de los locos

El periodismo no es espejo, es escudo

La crisis de confianza que hoy atraviesa la información no es un fenómeno abstracto. Es el resultado de décadas en las que el poder a domesticado la palabra para convertirla en mercancía o en propaganda. Hoy, defender la verdad no es un ejercicio de nostalgia profesional, sino un acto de resistencia democrática y decolonial. El periodismo sólo tiene sentido si se convierte en el escudo de los oprimidos y en el fiscal incansable de un sistema que, bajo la fachada de la “ley”, profundiza las brechas de clase, raza y género.

La posverdad se ha convertido en un modelo de negocio. Ese negocio se alimenta de la confusión de los sectores populares. Cuando se instalan narrativas falsas, las primeras en perder son las ciudadanías, las comunidades, quienes ven cómo sus demandas legítimas son invisibilizadas por el ruido de los manipuladores.

El periodismo independiente tiene la obligación moral de desmontar estos fundamentalismos. No se trata de una “neutralidad” incontaminada que pone en el mismo nivel al manipulador y al manipulado; se trata de una honestidad radical que utiliza el dato y el contexto histórico

para demostrar que la desigualdad no es un accidente, sino una decisión política.

Un periodismo que se reivindica democrático debe fiscalizar el poder, no basta con vigilar al político de turno, hay que auditar a las corporaciones que saquean los recursos públicos; entender que la violencia no se explica igual si no analizamos el cruce entre la pobreza y marginalidad.

La independencia genera incomodidad. Y esa es, precisamente, la señal de que se está haciendo el trabajo correcto. Si el periodismo no molesta a quienes se creen dueños del destino de las mayorías, entonces es solo relaciones públicas.

El reto para la prensa y para la ciudadanía va más allá de la lectura de un titular. Necesitamos un periodismo que nos empodere, que nos devuelva la capacidad de soñar con transformaciones sociales profundas y que nos recuerde que la verdad es un bien común, no un privilegio de pocos.

Que la “fuerza bruta” del autoritarismo y la mentira no dicten nuestra historia, atrevámonos a sostener el escudo de una información libre y comprometida con la vida. La respuesta no está solo en las redacciones, sino en cada ciudadano que decide no callar frente a la injusticia.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsa denuncia

Escobar reiteró que la mejor defensa contra la difamación es la transformación de los territorios históricamente olvidados, como la costa pacífica nariñense, en polos de desarrollo y paz.



El mandatario departamental Luis Alfonso Escobar asegura que las acusaciones, basadas en un mensaje anónimo, carecen de fundamento y buscan deslegitimar los avances de paz en el departamento. Tras recibir el respaldo de la familia de la víctima, el gobernador pide a los tribunales proteger su honra y el debido proceso frente a lo que califica como una “infamia política”.

El gobernador de Nariño, anunció que acudió a las autoridades competentes contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsa denuncia, pues las declaraciones del exmandatario, apoyado en un testimonio anónimo,

vinculan a Escobar con la planificación y financiación del asesinato del senador y aspirante presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

El mandatario departamental, primer afrodescendiente en ocupar este cargo en Nariño y único gobernador perteneciente al Pacto Histórico en Colombia, calificó el señalamiento como un golpe devastador para su honra y la de su familia.

Según el relato de Uribe, una fuente dispuesta a acudir a la Fiscalía, le informó que Escobar habría participado en una reunión en Manta, Ecuador, en mayo de 2025 para coordinar

el crimen. Sin embargo, el gobernador ha sido enfático al declarar que nunca ha visitado dicha ciudad y que no existen registros que respalden tal acusación.

La controversia tomó un giro significativo tras el pronunciamiento de Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador. Uribe Londoño rechazó públicamente que el dolor de su familia sea utilizado para “montar cortinas de humo”, en alusión al expresidente. Escobar manifestó que, aunque en lo personal ha decidido otorgar el perdón al expresidente para evitar el rencor, es imperativo que las instituciones judiciales ac-

túen para esclarecer la verdad y frenar la difusión de noticias falsas que ponen en riesgo su integridad.

Más allá del ámbito judicial, el gobernador sostiene que este ataque tiene un trasfondo político vinculado a los resultados de su gestión en el suroccidente del país. De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, Nariño ha logrado reducir el promedio de asesinatos asociados al conflicto, pasando de una tasa nacional de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes a 16 en el departamento. En municipios históricamente golpeados por la violencia como Tumaco, la reducción ha sido drástica, logrando periodos de festividades con cero muertes violentas.

La administración departamental defiende la estrategia de "Paz Total" en Nariño, que incluye diálogos regionales con grupos como los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y ha permitido una disminución del 92% en el reclutamiento infantil y del 94% en el confinamiento de comunidades.

Escobar argumenta que estos avances en la transición hacia economías legales incomodan a sectores que basan su discurso en el fracaso de la seguridad, convirtiendo su liderazgo en un objetivo para la descalificación pública en tiempos electorales.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la unidad nacional y al respeto por la vida, recordando que, a pesar de las profundas diferencias ideológicas que mantenía con el senador Miguel Uribe Turbay, la violencia nunca debe ser el camino para resolver los desacuerdos en una democracia. Escobar reiteró que la mejor defensa contra la difamación es la transformación de los territorios históricamente olvidados, como la costa pacífica nariñense, en polos de desarrollo y paz.



Fiscalía investiga anónimo sobre el crimen de Miguel Uribe

El expresidente Álvaro Uribe entregó a la Fiscalía una nota que señala al gobernador de Nariño en el magnicidio. El gobernador desmiente la acusación, mientras el presidente Petro advierte sobre una estrategia de desinformación a pocas semanas de los comicios presidenciales.

Este es el contenido del texto sin firma, que difundió Darcy Quin:

“Estimado presidente Uribe, hoy me dirijo a usted con el fin de comunicarlo del acto más despreciable realizado por el gobierno de turno y el gobernador de [tachado] en el mes de mayo de 2025.

Me informo un es alcalde del departamento de [tachado] que el actual gobernador de [tachado] acuerdo en Manta financiar el magnicidio del senador Miguel Uribe, acto seguido financió unas comparsas en su contra en los carnavales de Pasto. Además me confirmé de los acuerdos con los diferentes grupos al margen de la ley, hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima ya que el exalcalde y yo tememos por nuestras vidas.

De antemano muchas gracias, Dios y la patria lo protejan siempre”.

Ante la gravedad de los señalamientos, el gobernador Escobar rechazó de manera categórica las acusaciones. En ejercicio de su derecho a la defensa, anunció que emprenderá acciones legales contra el expresidente Uribe por difundir información que, asegura, pone en riesgo inminente su vida. Para desvirtuar el anónimo, el mandatario departamental explicó que sus registros migratorios oficiales prueban que no ha viajado a Ecuador durante su periodo de gobierno. Escobar, quien defendió su trayectoria académica de más de dos décadas, solicitó una cita urgente con la fiscal Luz Adriana Camargo para aportar sus pruebas y evitar que se le ponga “una lápida en la cabeza” basada en un escrito sin sustento.

El presidente Gustavo Petro reaccionó advirtiendo que este episodio responde a un plan para manipular a la opinión pública antes de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

ESTIMADO PRESIDENTE URIBE, HOY ME DIRIJO
A USTED CON EL FIN DE COMUNICARLE DEL
ACTOS MAS DESPRECIABLE REALIZADOS POR
EL GOBIERNO DE TURNO Y EL GOBERNADOR
DE [TACHADO] EN EL MES DE MAYO DE 2025
ME INFORMO UN ES ALCALDE DEL DEPARTAMENTO
DE [TACHADO] QUE EL ACTUAL GOBERNADOR DE
[TACHADO] ACORDO EN MANTA FINANCIAR EN
MAGNIFICIDIO DEL SENADOR MIGUEL URIBE,
ACTO SEGUIDO FINANCIÓ UNAS COMPARSAS
EN SU CONTRA EN LOS CARNAVALES DE PASTO
ADemás ME CONFIRME DE LOS ACUERDOS
CON LOS DIFERENTES GRUPOS AL MARGEN DE
LA LEY, HOY PONGO EN SUS MANOS ESTA
INFORMACIÓN ANÓNIMA YA QUE TEMEMOS POR NUESTRAS VIDAS.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay

A diferencia de otros magnicidios, en este las autoridades han identificado y capturado a los culpables.



El fallecimiento del senador y precandidato presidencial, tras dos meses de agonía por un atentado orquestado por disidencias de las FARC, reabrió las heridas de la violencia en Colombia y no termina de crear situaciones inesperadas.

Colombia se enfrenta nuevamente al fantasma de un magnicidio. Miguel Uribe Turbay, falleció el pasado 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El líder de la oposición uribista no logró sobrevivir a las graves heridas causadas en el ataque del 7 de junio en el barrio Modelia.

Este suceso, que evoca las tragedias más oscuras de finales del siglo XX, dejó un vacío en el panorama electoral de 2026.

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que el atentado fue ejecutado por un adolescente de 14 años, identificado bajo el alias de “Tianz”, quien habría sido reclutado por redes de sicariato urbano. Según el ente investigador, detrás de la acción criminal se encuentra la estructura denominada “Segunda Marquetalia”, bajo el mando de José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”.

Miguel Uribe Turbay, quien fue el senador más votado en las elecciones de 2022 por el partido Centro Democrático, se perfilaba como una de las alternativas de derecha más sólidas para la actual contienda presidencial. Su trayectoria estuvo definida por una formación académica en la

Universidad de los Andes y la Universidad de Harvard, por su tránsito desde la presidencia del Concejo de Bogotá hasta la Secretaría de Gobierno de la capital. En el Congreso, fue una voz crítica frente a la administración de Gustavo Petro, centrandose su agenda en la libertad económica y la seguridad democrática.

Sin embargo, su perfil político estuvo siempre ligado a una historia personal de dolor y resiliencia. Hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un operativo de rescate tras ser secuestrada por el cartel de Medellín, Uribe Turbay creció marcado por la violencia del narcoterrorismo. A pesar de esta tragedia, el senador defendió públicamente el

perdón como una herramienta de construcción social.

La sociedad civil ha manifestado que este magnicidio debe ser un punto de inflexión para evitar que el país retorne a la época de la intolerancia armada.

Días antes del ataque, el senador había finalizado su libro “Mi causa: Colombia”, una obra que hoy adquiere un carácter de testamento político. Trágicamente, su fallecimiento deja en la orfandad a su hijo de cuatro años, repitiendo el ciclo de violencia.

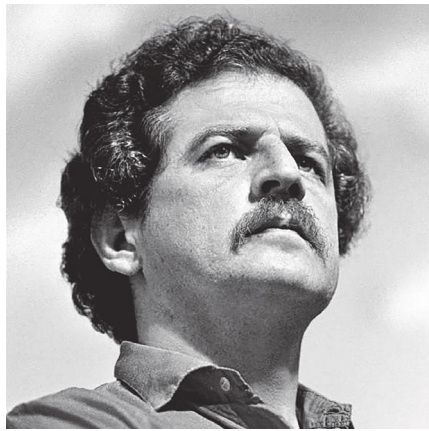
Mientras la justicia avanza con las condenas de los autores materiales, el país sigue a la espera de respuestas claras sobre la red intelectual que facilitó este crimen.

Magnicidios recientes en la historia de Colombia



Jorge Eliécer Gaitán (1948)

Líder de masas liberal y candidato a la presidencia. Su asesinato en Bogotá desató el gran estallido social conocido como el “Bogotazo” y marcó el comienzo de un sangriento periodo conocido como “La violencia”.



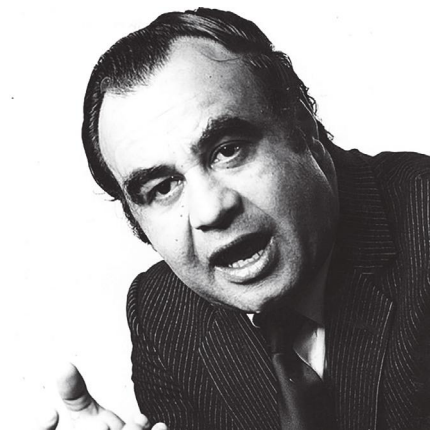
Luis Carlos Galán (1989)

Líder del Nuevo Liberalismo y símbolo de la lucha contra el narcotráfico y la renovación política. Fue acribillado en Soacha por sicarios vinculados al cartel de Medellín y a grupos paramilitares.



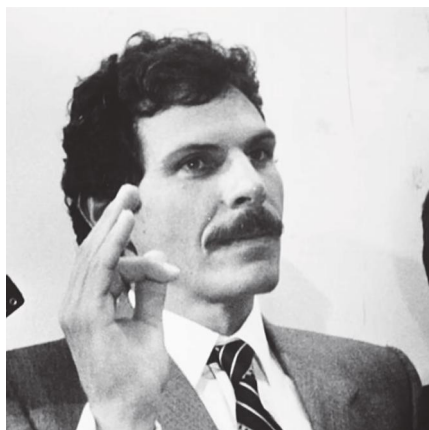
Bernardo Jaramillo Ossa (1990)

Líder y candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP). Su muerte fue parte del violento exterminio político prolongado por más de dos décadas contra este partido.



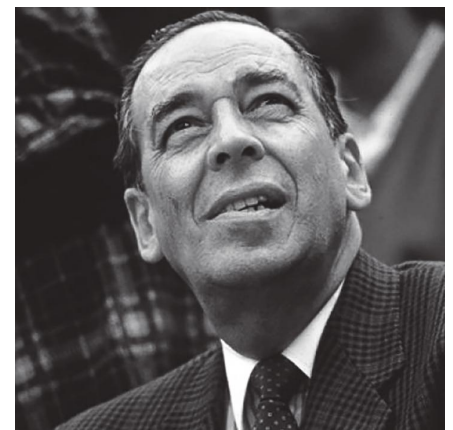
Jaime Pardo Leal (1987)

Dirigente y candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP), asesinado en el marco de la persecución y exterminio sistemático contra los miembros de su partido.



Carlos Pizarro Leongómez (1990)

Candidato presidencial asesinado en el interior de un avión, 45 días después de haber firmado un acuerdo de paz con el Estado y dejar las armas como comandante del M-19.



Álvaro Gómez Hurtado (1995)

Líder conservador, excandidato presidencial. Asesinado a la salida de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá; un crimen cuya autoría fue reconocida por las antiguas FARC.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA y la agresividad de la derecha

El reconocido abogado penalista y candidato de la extrema derecha consolida su aspiración presidencial bajo un discurso de represión, reducción del Estado y una estética de éxito personal.

Abelardo de la Espriella dejó de ser percibido como un abogado de casos polémicos para transformarse en un actor político de primer orden en la carrera por la presidencia de Colombia. Lo que comenzó como una aspiración recibida con desdén por los sectores políticos, hoy se traduce en una candidatura que capitaliza la agresividad social y la polarización. Bajo el alias de “El Tigre”, el abogado ha construido una plataforma basada en la mano dura, la disminución de la carga tributaria y una reforma drástica de las instituciones públicas, logrando desplazar a figuras consolidadas de la derecha tradicional.

Su ascenso se explica, en parte, por una estrategia de comunicación disruptiva que rompe con la narrativa política convencional. Mientras otros candidatos apuestan por resaltar orígenes humildes, De la Espriella hace gala de su patrimonio y éxito empresarial, utilizando un enfoque aspiracional que conecta con sectores ciudadanos que gustan del arribismo. No obstante, esta imagen de “magnate paracaidista” ha generado interrogantes sobre la viabilidad real de su programa de gobierno, el cual sus críticos califican como un discurso emocional irracional que carece de soluciones técnicas para los problemas estructurales del país.

En el ámbito internacional, el candidato no oculta su admiración por figuras como Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina y Donald Trump en Estados Unidos. De la Espriella busca emular el

control territorial del primero y las políticas de choque económico del segundo, aunque sus detractores señalan una diferencia fundamental, Abelardo carece de experiencia previa en cargos de elección popular o gestión administrativa pública. Para mitigar esta percepción de “salto al vacío”, ha designado como su fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo, una figura con trayectoria técnica en el manejo de las finanzas estatales en gobiernos de derecha.

La trayectoria profesional de De la Espriella también es objeto de intenso debate público. Como cabeza de una de las firmas legales más sonadas del país, ha representado a personajes señalados en casos de alta complejidad, incluyendo a desmovilizados de las autodefensas, al promotor del DMG y al señalado testarfero Alex Saab. Ante los cuestionamientos por la procedencia de sus recursos y la ética de sus defensas, el candidato sostiene la legalidad del ejercicio del derecho penal y subraya la ausencia de sanciones judiciales o administrativas en su contra. Asimismo, destaca que su ciudadanía estadounidense es una muestra de que no existen procesos pendientes con la justicia internacional.

La relación del candidato con los sectores tradicionales de la derecha, particularmente con el expresidente Álvaro Uribe, ha sido tensa, entre episodios reconocimiento del liderazgo y de confrontación mediática. Tras distanciarse del Centro Democrático y lanzar listas propias al Congreso, De la Espriella ha logrado

mantener su base electoral, incluso frente al crecimiento de otras candidaturas del sector.

En el actual escenario de polarización, el discurso de De la Espriella es visto por sus seguidores como la determinación necesaria para enfrentar los problemas de seguridad y privatización. Sin embargo, para otros sectores de la sociedad, su retórica agresiva contra opositores y movimientos sociales despierta preocupaciones sobre el respeto a las garantías democráticas y el pluralismo.





El ascenso de Paloma Valencia está llegando a su techo?

La coalición de centroderecha bajo la figura de la senadora uribista juntó varios líderes políticos y el apoyo de las directivas de los partidos tradicionales, para intentar ser segunda en la primera vuelta del 31 de mayo.

Paloma Valencia como la carta principal de los sectores de derecha, está amenazada desde su propio orilla política por Abelardo De La Espriella, para definir quien pasa a una posible segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

Viniendo del uribismo, Valencia unificó a la centro derecha e introdujo un factor de moderación para atraer a sectores que se sienten distantes de las posturas radicales, al elegir a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial.

Paloma Valencia ha logrado capitalizar un relato de gestión y acuerdos, distanciándose de las retóricas de confrontación directa que caracterizaron el inicio de la contienda.

Ha construido una narrativa de unidad con la que quiere competir la propuesta de “acuerdo nacional” del candidato progresista Iván Cepeda, pero eso la distancia del ultraderechista Abelardo De La Espriella.

La gran incógnita es si el actual piso de respaldos será suficiente para pasar a segunda vuelta. Los sondeos más recientes indican que, con la suma de las fuerzas que hoy la acompañan, lograría empatar con Abelardo en primera y tendría mejores posibilidades que éste, para enfrentar al candidato de la izquierda en un eventual balotaje.

Ante este escenario, la campaña de Paloma necesita desgastarse en primera enfrentando a un posible aliado en segunda. Necesita atacar al Tigre para pasar a segunda y del apoyo del Tigre para intentar ganarle a Cepeda en junio.

La derecha tiene dos cartas para las presidenciales, la de Abelardo es tan reaccionaria, que Paloma quedó moderada.

Nariño

una economía desconectada

Al aislamiento físico se suma el conflicto comercial con Ecuador, que revela una profunda ceguera de política pública. Mientras el comercio bilateral es macroeconómicamente marginal para Bogotá y Quito, para Nariño es crítico. La “guerra comercial” de 2026 evidencia la inexistencia de una gobernanza binacional.



La economía de Nariño enfrenta una paradoja dentro de la teoría económica, su proximidad a fronteras y dotación de recursos no se traducen en crecimiento, sino en vulnerabilidad logística y fragilidad institucional. Para abril de 2026, el colapso del corredor Panamericano y las tensiones arancelarias con Ecuador no son crisis coyunturales, sino la manifestación de una falla sistémica en la arquitectura de integración nacional.

El eje de esta problemática es la vía Panamericana (Pasto-Popayán). Nariño opera como una economía insular conectada por un solo filamento a la economía nacional. Su fractura, por eventos geodinámicos o acciones antrópicas, genera choques de oferta. Por ejemplo, estimaciones del año anterior indican que por los cierres de la vía Panamericana se limitan alrededor de 100.000 toneladas mensuales, lo cual se traduce en alrededor de 14 mil

millones de pérdidas, esto provoca desabastecimiento de materias primas e incremento de precios de alimentos y combustibles (Caracol, 2025). Esta incertidumbre eleva la prima de riesgo; el costo de oportunidad de ubicación es hoy prohibitivo para la inversión privada, lo cual es un efecto adicional a esta problemática.

A este aislamiento físico se suma el conflicto comercial con Ecuador, que revela una profunda ceguera de política pública. Mientras el comercio bilateral es macroeconómicamente marginal para Bogotá y Quito, para Nariño es crítico. La “guerra comercial” de 2026 evidencia la inexistencia de una gobernanza binacional. Según Cámara de Comercio de Ipiales, en el último mes, las exportaciones por el puente internacional de Rumichacha fueron cero, y donde el tránsito de carga tuvo una reducción cercana al 98%, pasando de 300 tractomulas diarias a una circulación mínima de mercancías. Así como también, los gremios empresariales destacan que esta situación generó una disminución del 70% de la actividad laboral de las empresas fronterizas (Gómez, 2026). Es así que, el conflicto comercial con Ecuador ha generado un desplazamiento del comercio hacia circuitos de informalidad y contrabando ante la inoperancia del control estatal.

Además, los constantes bloqueos y atentados presentados durante 2026 dejan en evidencia la alta vulnerabilidad logística del departamento

de Nariño. Según representantes gremiales el cierre de la vía obliga a utilizar vías alternas que incrementan los tiempos de transporte de 11 a 24 horas, lo que se traduce en un aumento significativo de los costos logísticos, y donde afecta el abastecimiento de productos agrícolas y lácteos provenientes de Nariño. (Redacción BLU Radio, 2026). Lo anterior hace que se reduzca la competitividad territorial y que se acentúe el aislamiento económico del departamento de Nariño con el resto del país

Para romper esta inercia, debe haber intervención del Estado para que haya cambios estructurales. La doble calzada Pasto-Popayán y la variante San Francisco-Mocoa son imperativos para desconectar el destino de Nariño de las vicisitudes del Cauca. Así como también, es urgente potenciar el puerto de Tumaco y diseñar una agenda de desarrollo fronterizo que fortalezca la agroindustria local y reactive mecanismos de coordinación binacional.

La situación actual de Nariño es el epílogo de una planificación que ignoró la geografía económica. Sin una transformación radical de la matriz de conectividad y una defensa de los intereses comerciales en la frontera, Nariño seguirá atrapado en un equilibrio de bajo desarrollo, una economía de cuello de botella, rica en recursos, pero empobrecida por su aislamiento y la fragilidad del modelo de integración vigente.

Referencias:

Caracol. (2025). Empeora situación en Nariño ante cierre de vía Panamericana: Incrementa la gasolina y los alimentos. <https://caracol.com.co/2025/03/17/afectaciones-que-ha-dejado-el-cierre-de-la-via-panamericana-se-disparan-los-indices-de-la-gasolina/>

Gómez, D. (2026). “Exportaciones cero por Rumichacha”; advierte la CCI a cinco días del arancel de 100%. La República. <https://www.larepublica.co/empresas/exportaciones-0-por-el-puente-internacional-rumichacha-advierte-la-camara-de-comercio-de-ipiales-a-cinco-dias-del-arancel-de-100-hacia-ecuador-4386562>

Redacción BLU Radio. (2026). Atentados en la vía Panamericana afectan suministro de combustible y alimentos en el suroccidente. BLU Radio. <https://www.bluradio.com/regiones/pacifico/atentados-en-la-via-panamericana-afectan-suministro-de-combustible-y-alimentos-en-el-suroccidente-rg10>

EDICTO

La Familia de BRAYAN STEVEN GUALGUAN PESILLO (Q.E.P.D)

Informa su sensible Fallecimiento ocurrido el día 12 de abril 2026 en la Ciudad de Pasto.

Las personas que se crean con derecho a algún reclamo podrán comunicarse al teléfono (3156123504- 3186903860)

AVISO

Se necesita personas para trabajar en proyectos de comunicación. Con experiencia o actitud para aprende periodismo escrito, radial y digital.

Comunicarse por WhatsApp al

3106469136

El descontrol de la paz en Nariño

A dos meses y medio de gobierno Petro, el éxito de esta fase decisoria dependerá de una coordinación institucional eficaz y del respaldo decidido de la Presidencia. En Nariño pueden quedar en nada los avances con los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Bolivariana

Armando Novoa defendió el carácter político de los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano frente a los recientes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre la naturaleza de estos grupos. El delegado advirtió que el tiempo apremia para consolidar la paz en regiones golpeadas por la pobreza y el abandono estatal como Nariño y Putumayo.

El jefe de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la disidencia, hizo un llamado de urgencia al presidente Gustavo Petro para acelerar las decisiones políticas y administrativas que permitan sentar las bases de un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días.

La controversia se originó con las declaraciones del primer mandatario en las que calificó como un “error” considerar a los actuales grupos armados como guerrillas insurgentes. Según el presidente Petro, estas estructuras operan principalmente como organizaciones delictivas dedicadas al control de rentas ilegales, por lo cual planteó que las negociaciones deberían tener un carácter “socio-jurídico” con la participación directa de la Fiscalía General de la Nación, buscando más un sometimiento que un pacto de paz.

Pero, en una serie de pronunciamientos públicos, Novoa defendió la legitimidad de la mesa de diálogo y recordó que el marco legal vigente, bajo la Ley 2272 de 2022, diferencia claramente los acercamientos para el sometimiento de los diálogos de carácter político. El negociador sostuvo que la resolución que dio vida a esta delegación tiene como fin obtener soluciones al conflicto armado y facilitar el desarme y la desmovilización, por lo que aseguró que la labor de la mesa no ha incurrido en errores legales al reconocer la naturaleza política del grupo.

Más allá de la discusión jurídica, el jefe negociador enfatizó que la realidad en territorios como el Pacífico nariñense y Putumayo no puede reducirse a un asunto policial. Novoa señaló que el dominio



que ejercen estos grupos armados es consecuencia de una ausencia histórica del Estado y de elevados niveles de pobreza que han fracturado la construcción de la nación. En ese sentido, destacó que el proceso de paz busca precisamente integrar estas regiones a la legalidad y a la justicia social.

Entre los avances presentados para sustentar la continuidad del proceso, la delegación destacó la destrucción de 15 toneladas de explosivos realizada a finales del año pasado y la disminución de los índices de homicidios en las zonas de influencia del grupo armado. Asimismo, se informó sobre la adecuación de predios en el Valle de Guamuez



Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno Nacional

para la creación de zonas de ubicación temporal, donde se espera que cerca de 200 integrantes de esta organización inicien su tránsito a la vida civil sin armas ni uniformes.

Finalmente, el negociador insistió en que el éxito de esta fase decisoria dependerá de una coordinación institucional eficaz y del respaldo decidido de la Presidencia. Novoa subrayó que el compromiso con la salida negociada al conflicto es un mandato constitucional y que, pese a la complejidad de las economías ilícitas y los cultivos de uso ilícito en la zona, la búsqueda de la paz por medios pacíficos sigue siendo el camino para proteger a las comunidades más vulnerables del país.

El gobierno define zonas de ubicación para cuatro grupos armados y excluye inicialmente a ocho jefes pedidos en extradición.

El presidente Gustavo Petro autorizó el traslado de miembros de cuatro organizaciones armadas ilegales a siete Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) a partir del próximo 25 de junio y hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, la medida incluye una restricción estricta, los integrantes de estas estructuras que tengan órdenes de extradición vigentes no podrán ingresar en esta primera etapa. La decisión busca reactivar los canales de diálogo en territorios afectados por el conflicto, bajo la condición de que la situación judicial de estos líderes será evaluada posteriormente de forma directa por el jefe de Estado.

Esta determinación coincide con una profunda controversia jurídica entre la Casa de Nariño y la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador, liderado por la fiscal Luz Adriana Camargo, rechazó la solicitud del Ejecutivo de suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, argumentando la falta de información clara sobre los compromisos de desmantelamiento y el universo real de los beneficiarios.

Entre la paz y la extradición

Dos jefes de la guerrilla en proceso de paz territorial en Nariño, no podrán estar en las zonas de ubicación temporal



Geovanni Rojas, Gabriel Yepes Mejía y Andrés Allende

El panorama nacional muestra un tejido complejo de violencia con más de 30.000 personas vinculadas a organizaciones al margen de la ley, donde el Clan del Golfo figura como la estructura más numerosa con más de 9.000 integrantes, seguida por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y diversas facciones disidentes de las antiguas Farc.

Entre los ocho líderes excluidos provisionalmente de las zonas de reubicación se encuentran Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo y jefe del Clan del Golfo; Geovanni Rojas, señalado líder de los Comandos de Frontera en el Putumayo, y Andrés Allende, comandante del Bloque Alfonso Cano en Nariño, los dos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Asimismo, la restricción cobija a Javier Alfonso Velosa García, alias John Mechas, y Willinton Henao Gutiérrez, señalados cabecillas del Frente 33 de las disidencias en el Catatumbo, junto a Gabriel Yepes Mejía, Oliverio Orfilio Pai y Jorge Wilfredo Rosero Marín, vinculados al frente Comuneros del Sur en el departamento de Nariño. La mayoría de ellos afronta requerimientos de cortes estadounidenses por tráfico de estupefacientes.

Comunidades y víctimas reclaman la paz como política de Estado

Ante el fortalecimiento de los grupos armados y la proximidad del relevo presidencial, surge la necesidad de transitar hacia “paces territoriales” basadas en resultados verificables, transparencia pública y el blindaje institucional de los procesos.

El tiempo para la actual administración nacional comienza a agotarse y, con él, la viabilidad de su estrategia de paz enfrenta un examen crítico. La realidad en las regiones presenta un panorama complejo que exige madurez en el debate público: según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), al cierre de 2025 las estructuras armadas ilegales sumaban más de 27.000 integrantes, lo que representa un crecimiento del 23,5 % respecto al año anterior. Este incremento, liderado por grupos como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), demuestra que ni la acción militar aislada ni las negociaciones sin una arquitectura sólida han logrado frenar la recomposición criminal en el país.

La discusión ciudadana no debería limitarse a la elección simplista entre negociar o combatir. El desafío real consiste en recuperar la autoridad democrática en territorios donde el Estado ha llegado históricamente de forma fragmentada o tardía. Colombia necesita aceptar que la estabilidad no llegará únicamente a través de un gran acuerdo solemne, sino mediante la construcción de “paces pequeñas”: procesos situados, verificables y protegidos por las comunidades que padecen la violencia. Para ello, es fundamental que el diálogo no se quede encerrado entre delegados oficiales y voceros armados, sino que incorpore de manera efectiva a la sociedad civil, las iglesias, la academia y, por encima de todo, a las víctimas.

Dos aprendizajes recientes ofrecen pistas sobre este camino. En el Caribe, el acercamiento con el EGC —

una estructura con influencia en cerca de 300 municipios y control sobre economías ilegales— plantea el reto de reducir la violencia sin otorgar una legitimidad política que el grupo no posee. Por otro lado, la experiencia de paz urbana en Barranquilla ha permitido poner sobre la mesa crímenes que afectan la vida cotidiana, como la extorsión y el control barrial. Sin embargo, ambos esfuerzos corren el riesgo de convertirse en simples treguas temporales o “administraciones criminales del daño” si no cuentan con indicadores claros, justicia y una participación real de quienes han sido victimizados.

Para que estos esfuerzos sobrevivan al actual gobierno, es imperativo desclandestinizar y desgobernalizar la paz. Desclandestinizar implica abrir una deliberación pública responsable, con reglas claras de información y pedagogía, evitando que el secreto alimente la sospecha o el sabotaje. Desgobernalizar significa anclar los procesos en las instituciones, en los planes territoriales y en presupuestos definidos, de modo que la paz deje de ser un proyecto vinculado a la popularidad de un presidente y se convierta en una obligación del Estado. Si los procesos dependen exclusivamente de la voluntad del mandatario de turno, cada elección se convierte en una amenaza de retroceso para las comunidades.

A pocos meses de finalizar este ciclo político, la pregunta no es si se debe salvar o enterrar una consigna gubernamental. El interrogante de fondo es qué aprendizajes territoriales merecen continuidad y cuáles

deben corregirse con urgencia. El próximo gobierno tendrá la facultad de ajustar la estrategia, pero no debería tener licencia para destruir los avances locales por mero cálculo electoral. La paz solo se legitima cuando las comunidades constatan que la extorsión cede, que los jóvenes tienen alternativas reales y que sus líderes son protegidos. Sin el protagonismo de la sociedad civil, los diálogos seguirán atrapados en el lenguaje de las armas; con ella, la paz podrá rendir cuentas ante quienes realmente importan.



La normalización de la violencia social

se consolida como la raíz del acoso en las aulas

Por: EducAcción*

Expertos y analistas advierten que el hostigamiento escolar no es un fenómeno aislado de los centros educativos, sino un reflejo de dinámicas de humillación presentes en la política, los medios y los entornos adultos.

A pesar de décadas de campañas de sensibilización y protocolos de actuación, el acoso escolar persiste con una intensidad que preocupa a la comunidad educativa y a la sociedad en general. La persistencia de este fenómeno sugiere que las estrategias implementadas hasta ahora podrían estar partiendo de premisas incompletas. La evidencia señala que el acoso en los colegios no nace de forma espontánea en el aula, sino que es el resultado de conductas y formas de relación que la sociedad adulta ha normalizado y, en ocasiones, incluso incentivado.

El análisis de esta problemática revela un marcado “adultocentrismo”. Existe una tendencia generalizada a observar el acoso como un conflicto exclusivo de menores, ignorando que las dinámicas de hostigamiento, exclusión y burla son comunes en entornos laborales, familiares y sociales de adultos. Al etiquetar a los involucrados con categorías fijas de “acosadores” o “víctimas”, la sociedad se distancia del problema, evitando revisar cómo las propias prácticas cotidianas refuerzan modelos de convivencia basados en la dominación simbólica de una persona sobre otra.

Este fenómeno se ve agravado por un contexto global donde el liderazgo político y mediático ha integrado la humillación pública y la ridiculización del adversario como herramientas legítimas de comunicación. Cuando figuras de relevancia internacional utilizan la violencia verbal de manera sistemática y sin consecuen-

cias visibles, envían un mensaje potente a niños y adolescentes sobre qué conductas generan reconocimiento y poder. En este escenario, el patio del recreo se convierte en un espejo de la plaza pública, donde el respeto es sustituido por la búsqueda de pertenencia a través del señalamiento del más vulnerable.

Desde una perspectiva garantista y humanista, es fundamental entender que las conductas de acoso suelen ser situacionales y relacionales, más que rasgos inherentes de la identidad de un menor. Reducir el conflicto a la existencia de “manzanas podridas” invisibiliza la responsabilidad del entorno. Muchas situaciones de abuso se sostienen porque el grupo, de forma activa o pasiva, normaliza el daño, y porque los propios participantes no se autoperiben como agresores, sino como parte de una dinámica grupal aceptada.

La solución al acoso escolar exige trascender las medidas meramente correctivas. Si bien las sanciones disciplinarias pueden detener un hecho puntual, no tienen la capacidad de transformar el clima de convivencia que permite que la violencia germine. El desafío para las instituciones y los hogares radica en cuestionar los modelos de relación que se transmiten fuera de las aulas. Solo a través de una revisión profunda de los valores democráticos y del respeto mutuo en todos los estratos sociales será posible garantizar que las escuelas sean espacios seguros donde la diferencia no sea motivo de castigo.

*EDUCACIÓN, grupo de estudio y movimiento de acción pedagógica, por una educación que se manifieste en prácticas concretas, innovadoras y con impacto social.

Debate por el oro en Nariño

Asamblea Departamental aprobó realizar una Audiencia Pública para estudiar la empresa mixta que quiere crear el gobernador

La propuesta del gobernador para fundar Prominar, no como empresa pública sino de economía mixta, reabre la discusión sobre el control de los recursos naturales, la protección ambiental y el futuro de miles de familias que dependen de la minería ancestral en una región golpeada por la violencia.

La Asamblea Departamental de Nariño retoma en sesiones extraordinarias la discusión de uno de los proyectos económicos y sociales más trascendentales del año, la creación de la Promotora Minera de Nariño (Prominar). La iniciativa, impulsada por el gobernador Luis Alfonso Escobar desde que inició su mandato, busca establecer un marco institucional en un sector donde la ilegalidad controla entre el 83% y el 93% de la explotación aurífera, según cifras oficiales.

El dilema es el modelo, ¿capital mixto o 100% público?

A pesar del consenso sobre la necesidad de intervenir el sector, la naturaleza jurídica de la nueva empresa provoca el debate. La propuesta del gobernador es una sociedad de economía mixta que permita recursos privados. No obstante, legisladores de la región, diputados y organizaciones civiles han manifestado serios reparos frente a este modelo.

Voces del Congreso, como el senador Alberto Benavides, han exigido públicamente que la promotora sea ciento por ciento pública. Advierten que abrirle la puerta al capital privado en este escenario podría derivar en una “captura legalizada” de los recursos nariñenses por parte de corporaciones externas, desplazando a las comunidades locales. La exigencia apunta a que el Estado asuma el control de la cadena de valor para



blindar el patrimonio de la región, una postura que adquirió mayor relevancia tras conocerse el interés del Ministerio de Hacienda en participar directamente en el proyecto.

Ordenamiento territorial y protección de los ecosistemas

Este debate regional coincide con las recientes acciones del Gobierno Nacional, que a través del Ministerio de Minas y Energía delimitó tres Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva en el departamento. Mediante la Resolu-

ción 40180, se oficializó el distrito del Noroccidente de Nariño, el cual se suma a los ya constituidos en el Triángulo del Telembí y el Piedemonte-Abades. Estos distritos buscan delimitar geográficamente las zonas aptas para la minería comunitaria y facilitar la transición hacia la legalidad bajo la política nacional de “Minería para la Vida”.

La Audiencia Pública

El diputado Alexander Rassa logró que se aprobara la convocatoria a una Audiencia Pública, para que un proyecto de tanta importancia no sea pupitrado por la mayoría controlada por el gobernador. La Audiencia se realizará este viernes 22 de mayo de 2026.

Por su parte el diputado Iván Guztin del Pacto Histórico, dejó constancia rechazando que el proyecto no inicie su debate en la comisión del Plan como lo determina el Reglamento, sino en la de Presupuesto. “Yo creo que hemos empezado mal este debate” dijo.

Que este proyecto haya sido nuevamente presentado en la recta final de las elecciones presidenciales, es lo menos conveniente, según el diputado Fabio Zarama; pero pretender aprobarlo sin el suficiente estudio y conocimiento público es al menos sospechoso, dijo una de las pocas personas que se encontraba en el recinto de la Asamblea, pendiente del debate.

Denuncias por acoso sexual sacuden la estructura de poder en los medios de información

La suspensión de reconocidas figuras de la televisión nacional trasciende el escándalo individual para exponer una cultura de violencia de género sistemática. El movimiento #YoTeCreoColega exige el cumplimiento de protocolos legales y el fin de la impunidad en las salas de redacción del país.

El periodismo colombiano atraviesa una crisis institucional sin precedentes que pone a prueba la ética de sus empresas informativas. Lo que comenzó como la suspensión preventiva de dos presentadores de Noticias Caracol, señalados por acoso sexual, se ha transformado en una movilización nacional bajo la consigna #YoTeCreoColega. Hasta la fecha, más de 60 testimonios de mujeres periodistas han salido a la luz, revelando un entorno laboral donde el abuso de autoridad y el hostigamiento han operado como mecanismos de control profesional durante décadas.

La sentencia T-140 de 2021 de la Corte Constitucional, impulsada por la valiente denuncia de la periodista Vanessa Restrepo, ya advertía la obligación de los medios de implementar rutas de atención claras. A pesar de contar con la Ley 2365 de 2024 para reforzar la protección laboral, los testimonios actuales sugieren que el cumplimiento de estas normas ha sido, en el mejor de los casos, una formalidad sin ejecución real en las empresas privadas y públicas.

El patrón de conducta identificado por liderazgos como los de las comunicadoras Juanita Gómez y Paula Bolívar describe una asimetría de poder crítica. La mayoría de las víctimas eran pasantes o jóvenes recién graduadas, de entre 19 y 21 años, mientras que los señalados ostentan altos cargos jerárquicos y salarios privilegiados.

Esta dinámica permitía a los presuntos agresores actuar bajo un manto de impunidad, utilizando promesas de ascenso o amenazas de estancamiento profesional para silenciar a quienes daban sus primeros pasos en la carrera informativa.

Los relatos recopilados exponen una realidad cruda que va desde comentarios lascivos sistemáticos hasta agresiones físicas directas. Esta violencia no solo afecta la integridad de las mujeres, sino que empuja la democracia al forzar el retiro de profesionales brillantes que abandonan el oficio ante la falta de garantías. La situación se extiende incluso al sistema de medios públicos, RTVC, cuya gerencia actual ha sido cuestionada por comportamientos que entran en contradicción con los valores de defensa social que estas instituciones deberían representar.

Organizaciones como la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género insisten en que la responsabilidad no puede seguir recayendo sobre las víctimas. El debate público actual busca que “la vergüenza cambie de bando”, emulando procesos de justicia social internacionales. El reto para los medios de comunicación colombianos ahora es pasar de los comunicados de prensa a la reforma estructural, garantizando que el ejercicio de informar no vuelva a estar condicionado por el sometimiento o el silencio frente al abuso.



OSCAR BENAVIDES

el dirigente político afrodescendiente más importante de Nariño

El abogado tumaqueño, quien forjó su camino desde el trabajo informal en la capital de Colombia, logró su curul en la Cámara de Representantes con el respaldo de 150.000 ciudadanos. Su gestión busca priorizar la participación comunitaria en la reforma agraria y cerrar las brechas de desigualdad en el Pacífico colombiano.

El panorama político del departamento de Nariño y de las comunidades afrodescendientes en el país registra un cambio de tendencia tras la consolidación de Óscar Benavides como Representante a la Cámara. Con una votación que supera los 150.000 apoyos, la cifra más alta registrada en la historia de las circunscripciones especiales de paz y etnia, el abogado y líder social llega al Capitolio Nacional bajo las banderas del movimiento Libres. Este triunfo, obtenido sin el respaldo de las estructuras tradicionales ni del gobierno departamental y financiado mediante créditos bancarios, representa un quiebre frente a las dinámicas de las maquinarias regionales.

La trayectoria de Benavides se aleja de los círculos de élite. Su historia personal, marcada por sus años como pescador de camarones en las orillas del Pacífico y, posteriormente, como trabajador de servicios generales barriendo las calles de Bogotá, ha resonado en un electorado que busca representatividad basada en la experiencia de vida y el esfuerzo. Esta legitimidad de base le ha permitido articular un discurso crítico contra lo que él denomina “afroconvenientes”, sectores que, según el nuevo legislador, utilizan la identidad étnica únicamente como vehículo electoral sin generar transformaciones reales en los territorios.

El impacto del movimiento Libres no se limita a la figura de Benavides, pues la organización logró asegurar una segunda curul en el Congreso con Ángela Guanga. Este resultado posiciona al colectivo como una fuerza que busca dignificar la representación de las comunidades negras, raizales y palenqueras. El enfoque del nuevo representante se distancia del espectáculo mediático para centrarse en la defensa técnica del territorio, promoviendo una agenda legislativa que prioriza las causas sociales y el debido proceso en la gestión pública.

En sus primeras acciones territoriales tras la elección, Benavides se desplazó a Tumaco para establecer una interlocución directa con el gobierno nacional. Tras una reunión con el presidente Gustavo Petro, el congresista logró que la Agencia Nacional de Tierras aplazara la elección del Comité Municipal de Reforma Agraria en dicho municipio. El objetivo de esta medida es garantizar que el proceso sea masivo y participativo, asegurando que los jóvenes, organizaciones campesinas y comunidades indígenas tengan una voz efectiva en la distribución y manejo de la tierra, eje central de los conflictos sociales en la región.

El liderazgo de Benavides se perfila como una invitación a la participación política activa de las nuevas generaciones en Nariño y el resto del país. Al promover una política libre de manipulaciones y enfocada en la justicia social, el congresista busca transformar el rol del Pacífico en la agenda nacional. Su gestión en los próximos cuatro años será clave para determinar si este modelo de representación popular logra consolidar las reformas estructurales necesarias para reducir el abandono histórico que afecta a las costas colombianas.

Perú define su futuro presidencial entre los legados de Fujimori y Castillo

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputarán la presidencia el próximo 7 de junio en un escenario de profunda polarización. Con un empate técnico en las encuestas, el país decide entre la reivindicación del fujimorismo y la continuidad de la agenda social del castillismo.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, protagonizarán una contienda que, más allá de sus trayectorias personales, representa el choque de dos herencias políticas que mantienen fracturada a la sociedad peruana: el fujimorismo de los años noventa y el movimiento reivindicativo que llevó al poder a Pedro Castillo en 2021.

La división del electorado es tanto ideológica como geográfica. Mientras Fujimori mantiene su principal bastión en Lima, prometiendo restaurar el orden frente a la inseguridad, Sánchez lidera en las zonas rurales bajo la consigna del cambio social.

Fujimori carga con el cuestionado desempeño de su bancada parlamentaria en la última década, señalada como factor de inestabilidad, mientras que Sánchez debe lidiar con los señalamientos de autoritarismo que pesan sobre el legado de Castillo tras su intento de quiebre institucional en 2022.



Keiko y Sánchez

Cuba y el ajedrez geopolítico en Taiwán

Ante el estancamiento en las tensiones con Irán, la mirada de Washington vuelve a posarse con fuerza sobre Cuba, una nación a la que llevaron a una severa crisis energética y de abastecimiento que afectan directamente las condiciones de vida de la población civil.

Por otro lado, la reciente cumbre bilateral en Pekín, más allá de los acuerdos comerciales que benefician a grandes corporaciones tecnológicas y aeronáuticas bajo el lema de una “nueva estabilidad”, los mandatarios abordaron temas neurálgicos de soberanía y seguridad que mantienen en vilo a comunidades enteras.

El gobierno chino manifestó de forma expresa que Taiwán constituye su principal prioridad de seguridad, alertando sobre el riesgo de un conflicto armado y sondeando el nivel de compromiso militar que Washington mantendría con Taipéi. La respuesta de la administración estadounidense, sugiere la posibilidad de un entendimiento implícito entre ambas potencias. Esta potencial negociación plantea un escenario donde el destino de Taiwán y el de Cuba queden vinculados a las concesiones mutuas de los dos bloques, priorizando la estabilidad geopolítica de las superpotencias sobre las aspiraciones de autonomía de los pueblos soberanos.



Díaz Canel Presidente de Cuba

Nueva York congela alquileres y eleva impuestos a las grandes fortunas

La Alcaldía de Nueva York puso en marcha una serie de reformas económicas destinadas a aliviar la presión financiera sobre las familias de ingresos medios y bajos. Las medidas principales contemplan la propuesta de congelar los precios de los alquileres regulados, una decisión que beneficia directamente a más de dos millones de ciudadanos. Asimismo, el gobierno local creó una tasa anual dirigida a los propietarios de residencias de lujo valoradas en más de cinco millones de dólares que no residan de forma permanente en la ciudad.

El alcalde Zohran Mamdani defendió la iniciativa como un acto de equidad distributiva para responder al acelerado encarecimiento del costo de vida. Según datos del sector inmobiliario, el alquiler mediano en la urbe se situó a finales del año pasado en 3.585 dólares, lo que representa un incremento de más de 1.000 dólares en comparación con los registros de hace cuatro años. Esta escalada de precios dificulta la permanencia de los residentes históricos en sus propios barrios, transformando el acceso a la vivienda en un conflicto social prioritario.

Ante la necesidad estructural de ampliar la oferta habitacional y garantizar el derecho a la vivienda, la administración local presentó una iniciativa busca reducir los trámites burocráticos y acelerar la edificación de complejos asequibles.



El alcalde Zohran Mamdani

Colombia y sus regiones

En CONVERSEMOS de Nariño Hoy, estuvo con el Senador Ferney Silva del Pacto Histórico, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de esa corporación.

El gobierno presentó desde el año 2024 un acto legislativo para reordenar el territorio.

La Comisión Legal Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado sesionó en Pasto, y el presidente de la Comisión Ferney Silva, conversó con Germán Ponce Córdoba, y estas son algunas de sus apreciaciones:

Siempre se ha buscado la manera de que las regiones tengan autonomía pero no habían quedado plasmadas en ninguna constitución.

Es en la Constitución del 91 quedó expreso que Colombia es un estado social de derecho, pero también que es un estado que busca la descentralización y la autonomía de las regiones, y se habla sobre la posibilidad de que muchas de las labores y las decisiones del nivel nacional puedan ser regidas por los entes territoriales.

Es decir llevamos casi 35 años con una Constitución que busca la descentralización y la autonomía de las regiones pero que no se ha logrado aún su implementación real.

El acto legislativo 003 del 2024 aprobó que, de manera gradual, el 22.5% del Sistema General de Participaciones, que hoy se transfiere a los municipios y los departamentos, pasará al 39.5%. Es por eso que la ley que está radicada en la Cámara de Representante busca reglamentar qué competencias o funciones tienen los entes territoriales.

Video CONVERSEMOS en <https://www.facebook.com/share/v/1BKFQmmFht/>



Este gobierno, el del presidente Gustavo Petro, ha pretendido que tengan mayor autonomía en las decisiones de inversión las entidades territoriales, porque ellas son las que conocen de primera mano sus problemáticas, porque la descentralización descongestiona funciones y permite a los municipios contar con recursos que priorizarán en agua para el consumo humano, el sector salud y educación.

Los recursos actuales y los que tienen los municipios no son suficientes para resolver los problemas de la ciudadanía, pero la nueva

normatividad busca la manera de optimizarlos con eficacia.

Muchas de las labores administrativas que desarrolla el gobierno nacional hoy, tienen que pasar a los gobiernos municipales y departamentales, esto requiere de nuevas capacidades de la institucionalidad, para que puedan responder a esos nuevos retos.

Por consiguiente, la ley tiene en su reglamentación que flexibilizar el tema de las capacidades técnicas, que pasa no solamente por lo logístico y de dotación sino indudablemente por el recurso humano.

Las campañas presidenciales en Nariño

Distintas visiones de país debaten en Nariño sobre el futuro social y económico de la región. Voceros de las campañas de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo estuvieron en CONVERSEMOS, abordando temas como las reformas, la sostenibilidad fiscal y la ética en la política.

El departamento de Nariño se convirtió en el escenario de un debate democrático decisivo para el futuro del país.

Bajo la conducción de la periodista Mónica Juez, el encuentro permitió contrastar las propuestas de gobierno y los enfoques sociales de las campañas presidenciales de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, mientras que la campaña de Abelardo de la Espriella se excusó de participar por motivos de agenda.

El profesor **Henry Barco**, en representación de la campaña de Iván Cepeda (Pacto Histórico), defendió la urgencia de un cambio de modelo y proyectó que el departamento respaldará mayoritariamente una opción progresista. Barco argumentó que la propuesta de Cepeda se fundamenta en una “Revolución Ética” que busca transformar la gobernabilidad mediante principios transparentes y un diálogo nacional.



Mónica Juez

CONVERSEMOS



Henry Barco
Campaña Iván Cepeda



Juan Daniel Peñuela
Cmpaña Paloma Valencia



Manuel Pantoja
Campaña Sergio Fajardo

Según el vocero, el objetivo es tramitar las reformas sociales aplazadas en el Congreso de la República sin recurrir a la compra de conciencias, superando la crisis moral para lograr transformaciones de fondo en el territorio.

Por su parte, el actual representante a la Cámara, **Juan Daniel Peñuela**, vocero de la campaña de Paloma Valencia, centró su intervención en la necesidad de recuperar la seguridad y defender la Constitución de 1991. Si bien Peñuela destacó que su programa incluye políticas sociales para jóvenes, adultos mayores y el sector agropecuario, advirtió sobre el riesgo del asistencialismo estatal sin control. El congresista enfatizó que el reconocimiento de los derechos ciudadanos debe respetar la sostenibilidad fiscal para evitar un endeudamiento público costoso, como el que afecta las finanzas de la nación actualmente.

En una postura intermedia, el magíster Manuel Pantoja, portavoz de Sergio Fajardo, tomó distancia de los bloques anteriores y presentó a su candidato como la opción para la unidad y la reconciliación nacional. Pantoja centró la propuesta en el combate frontal a la corrupción y el fortalecimiento de la educación. Respecto a la institucionalidad, el vocero rechazó la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, explicando que, si bien la Constitución del 91 permite reformas por vías allí mismo establecidas, debe preservarse como el pacto de paz original que equilibró los derechos ciudadanos y el desarrollo económico, sin imposiciones de un sector sobre otro.

La raíz social del maltrato animal

El programa 'CONVERSEMOS' de Nariño Hoy reunió a una legisladora, académicos y activistas para analizar el impacto de la violencia hacia los animales no humanos, y la necesidad de reformas estructurales en el país.

El debate nacional y académico plantea que la crueldad hacia los animales refleja las dinámicas de desprotección que sufren los sectores más vulnerables de la población.

La acción de protección de los animales en Colombia se consolidó como un eje central de la discusión política, jurídica y cultural del país.

Diversos sectores sociales, académicos y legislativos coinciden en que la crueldad hacia los seres sintientes no constituye un hecho aislado, sino que es el reflejo directo de una violencia estructural que afecta con mayor rigor a las poblaciones más indefensas.

En el espacio de análisis CONVERSEMOS de Nariño Hoy, especialistas señalaron que la insensibilidad ante el dolor de otras especies debilita el tejido social y afecta la convivencia ciudadana. Ante este panorama, los expertos hicieron un llamado a implementar reformas en los modelos educativos, legales y de gestión pública para abordar la problemática desde su raíz social.

El reto legislativo y la gestión pública

La senadora Esmeralda Hernández, promotora de iniciativas como la prohibición de las corridas de toros y la inclusión de la fauna en los sistemas de gestión del riesgo, sostuvo que la movilización ciudadana debe traducirse de forma obligatoria en leyes e institucionalidad para generar transformaciones reales.

Destacó que Colombia registró avances mediante normas que res-

Video CONVERSEMOS en <https://www.facebook.com/share/v/1EnJuSvYYg/>



tringen espectáculos crueles y el avance de proyectos para tipificar conductas como la zoofilia dentro del Código Penal.

La congresista enfatizó que la gestión pública es fundamental para mitigar el abandono y la crueldad. Como ejemplo de ello, mencionó las experiencias regionales de hace una década en departamentos como Nariño, donde se implementaron las primeras políticas públicas de bienestar animal y la creó la Secretaría Ambiental, marcando un camino al país.

Una mirada desde la ética y el derecho

El análisis jurídico y filosófico conecta directamente el abuso animal con la vulnerabilidad social.

El abogado y filósofo Carlos Andrés Muñoz explicó que la violencia suele ejercerse sobre aquellos sujetos que carecen de herramientas físicas, sociales o jurídicas para defenderse. Asimismo, Muñoz advirtió que la formación actual en las facultades de derecho del país carece de herramientas robustas para enseñar la convivencia entre especies, un elemento que considera indispensable para construir una sociedad pacífica.

Por su parte, Arturo De La Cruz, docente investigador de la Universidad de Nariño, propuso redefinir la concepción de los animales como seres sintientes más allá de la simple capacidad de experimentar dolor o placer. De acuerdo con el investigador, estos seres poseen perspectivas de vida, intereses propios y roles

comunitarios o familiares específicos. Por lo tanto, acciones como el encierro, el abandono o la muerte violenta interrumpen de manera efectiva su desarrollo y los vínculos con su entorno.

Acción comunitaria y tejido social

El activismo ciudadano enfatiza la necesidad de articular los esfuerzos de las comunidades con las herramientas del Estado.

Camilo Jaramillo, defensor de los derechos de los animales, con trayectoria en movilización social, afirmó que los problemas de salubridad y el abandono masivo requieren intervenciones de raíz.

Actualmente, estas soluciones se materializan en jornadas de esterilización, veeduría de proyectos locales, pedagogía social y apoyo a fundaciones.

Los participantes del encuentro concluyeron que promover la empatía hacia otras especies constituye un paso fundamental para la reconstrucción del tejido social y el desarrollo de una convivencia democrática en el territorio nacional.



Pablo Romero Vega

CONVERSEMOS



Esmeralda Hernández
Senadora



Carlos Andrés Muñoz
Docente



Arturo De La Cruz
Docente



Camilo Jaramillo
Veedor

Los derechos de los animales, empatía y sociedad

Se habló de algo profundamente humano, sobre los animales no humanos. Casi todos y todas hemos compartido la vida con un perro, acariciado un caballo, admirado un pájaro; pero al mismo tiempo hemos vivido y hemos crecido en una sociedad que muchas veces nos enseñó a mirar el sufrimiento de los animales como un espectáculo, como una costumbre o como un simple paisaje, por eso tuvimos una conversación con cuatro personas que han decidido entregar su vida a la vida de otros seres sintientes.

Vamos a preguntarnos qué pasa con nosotros como sociedad cuando dejamos de sentir sufrimiento o dejamos de sentir frente al dolor de otro ser vivo. En esta conversación no se hizo señalamientos personales, ni éticos, ni morales, se trató de entender qué tipo de sociedad hemos construido, qué tipo de sociedad queremos construir y qué tipo de sensibilidad queremos.

Esmeralda Hernández, Senadora del Pacto Histórico

“Empecé a ver qué si no trasladamos esas discusiones a escenarios donde se toman las decisiones, nos quedábamos en movimiento de calle que genera indignación pero que no transforma.

Yo tuve el privilegio de vivir en Nariño varios años y desde donde estuve logramos transformar varias cosas. Nariño fue modelo en todo el país del primer carro de esterilización y bienestar animal, fue el primer departamento en el país en tener una Secretaría de Ambiente, el primer departamento en sacar una política pública en favor de los animales, y todo eso lo impulsamos hace unos 10 años. En Bogotá también impulsamos todo lo que se pudo desde la institucionalidad y ahora desde el Congreso podemos crear leyes, institucionalidad, paramejorar las condiciones de los animales.



Corporación para la Comunicación

